

GOBERNABILIDAD E IBEROAMERICA

Por: Lcdo. Rafael Hernández Colón
Gobernador de Puerto Rico
1973-76 - 1985-92

Les voy a hablar de los problemas de gobernabilidad que confronta Iberoamérica en estos tiempos en que los gobiernos democráticos ha dejado de ser excepción. Comenzaré con unos señalamientos de carácter general para luego examinar en algún detalle, tres países, Venezuela, Méjico y Chile, para cerrar con algunas consideraciones a vuelo de pájaro sobre algunos otros.

La democracia gana terreno no sin grandes dificultades en todas partes del mundo. En 1955 existían 36 naciones democráticas, hoy existen 107, aunque esto no quiere decir que estos países sean completamente libres desde una óptica de los derechos humanos, o políticos, o de las libertades civiles. Representa esperanzas e ilusiones para los pueblos que advienen a ella, a veces para tener un rudo despertar.

Iberoamérica cuenta hoy con el mayor número de democracias que en cualquier otro momento de su historia. Cuba y Haití son las excepciones principales. Perú, aunque tiene un presidente electo por el pueblo ha sufrido una transformación autoritaria no constitucional de sus instituciones que merece estudio aparte. Venezuela, Brazil y Guatemala han tenido cambios en sus gobernantes siguiendo procesos constitucionales como los seguidos en el caso del Presidente Nixon en los Estados Unidos.

Durante las tres décadas que precedieron a la actual, los países iberoamericanos menos Puerto Rico, siguieron una política de sustitución de importaciones mediante mecanismos proteccionistas que fomentaron industrias ineficientes y no competitivas, expandieron más allá de su función normal el sector público, gravando la sociedad con subsidios, ineficiencia y corrupción, incurrieron en un serio endeudamiento sin la debida evaluación de los programas y proyectos en que invertían, acompañado todo esto por la ausencia de estrategias coherentes y consistentes de desarrollo y de un deficiente manejo económico y financiero a corto plazo y de políticas de cambios de divisas que fomentaban la fuga del capital local.

La década del '80 fue una década de retroceso económico y social en toda iberoamérica, exceptuando a Puerto Rico. Algunos la llaman la década perdida. Yo difiero. En lo político es precisamente durante la segunda parte de la década que la democracia crece y se afianza. Sí hizo crisis durante la década el problema de la inhabilidad de los países iberoamericanos de pagar su deuda externa. Bajo la supervisión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, la mayoría de los países ha comenzado a reestructurar sus economías, ha abierto sus mercados, ha comenzado a pagar el interés sobre la deuda, está luchando contra una inflación difícilísima de frenar y da muestras de modestos crecimientos económicos. De todo esto no se ha beneficiado la inmensa mayoría de la población iberoamericana que permanece en profunda pobreza.

La democratización de iberoamérica no ha significado que se hayan resuelto los problemas que plantean las burocracias hipertrofiadas, la corrupción, el terrorismo o el tráfico de drogas. Tampoco se ha inaugurado una movilidad social que rompa con los esquemas sociales estratificados que han imperado por siglos para los 450 millones de iberoamericanos.

El Banco Mundial establece cuatro categorías de países conforme a su producto bruto per cápita. Bajos ingresos, medios bajos, medios altos y altos. En la primera tenemos a Haití y Honduras con un per cápita de \$590. La mayoría está dentro de la segunda, con una banda que va desde Bolivia con \$630 hasta Chile con \$1940, en la tercera caen países como Méjico con \$2,490, Brazil con \$2680 y Puerto Rico con \$7,000. Con la excepción de Puerto Rico, los países de Iberoamérica se encuentran en un nivel similar de desarrollo a pesar de las enormes diferencias que en cuanto a recursos existen entre ellos.

Si examinamos iberoamérica conforme al índice de desarrollo humano recientemente desarrollado por Naciones Unidas el cual toma en cuenta factores no solo económicos, sino también expectativa de vida y desarrollo educativo de las poblaciones, encontraremos países como Bolivia, Guatemala, Honduras y Nicaragua entre la cuarta parte más atrasada en el mundo con Uruguay, Chile y Costa Rica entre los que componen la tercera cuarta parte más adelantada. En Bolivia la mortalidad infantil es más de 10 veces más alta que en los países de la Unión Europea. En países como Brazil y Colombia la condición de millares de niños que

viven en pobreza es de absoluta degradación con una terrible insensibilidad de la sociedad hacia esta situación.

Los programas de ajustes económicos impuestos por el Fondo Monetario Internacional han afectado la capacidad de los gobiernos para socorrer los sectores más necesitados creando mayores desequilibrios sociales. La injusta distribución del ingreso --61.8 de iberoamérica vive bajo la línea de pobreza, el 5% tiene altos niveles de ingreso-- se ha acentuado. Las políticas neo liberales han privado a amplios sectores de la población de su acceso a servicios de salud, de educación y de vivienda. El progreso registrado como consecuencia de los ajustes ha ido más a las nuevas clases urbanas en perjuicio de las rurales, a la gente más rica, a las nuevas clases medias pero ha lacerado a millones de pobres campesinos y los habitantes de las favelas y arrabales.

Otros problemas serios aquejan los países iberoamericanos -- ciudades congestionadas y congestionándose; los peores ejemplos son Ciudad Méjico y Sao Paulo, la marginación de las comunidades indígenas, el crecimiento poblacional, los problemas del ambiente particulares a la región y su nivel de desarrollo, la fragilidad de los sistemas democráticos y el futuro de los estamentos militares.

¿Cómo están enfrentando los países iberoamericanos este desafío? ¿Qué estrategia y tácticas de gobierno están desarrollando en torno a la instrumentación de política para enfrentar problemas de esta magnitud dadas las limitaciones existentes en las instituciones gubernamentales prevaecientes que siguen el modelo presidencial burocrático decimonónico?

Moisés Naim, ex director ejecutivo del Banco Mundial ve la situación de iberoamérica de la manera siguiente: Se han tenido grandes éxitos en cambiar la salida de capitales a entrada de inversiones, en dismantelar estados que generaban pobreza y decadencia económica, en estabilizar las economías y depender de los mercados más que nunca. Eso fue relativamente fácil hacer porque sólo requería decisiones de política pública y no ejecución de programas.

Ahora viene lo difícil y es como reincorporar el Estado, como gobernar para introducir las reformas que requieren tiempo y paciencia. Y no se trata de reincorporar el Estado como dueño y gestor de líneas aéreas, o de grandes siderúrgicas, o de santo patrón de ineficientes industrias subsidiadas, o de reglamentador de pasada mano limitante de los márgenes necesarios para que la industria funcione.

Se trata de introducir el Estado para proveer infraestructuras y servicios básicos, a cobrar contribuciones, a reglamentar con profesionalismo y prudente limitación la actividad privada en el interés público, a asegurarse de la equidad en el reparto de los frutos del crecimiento.

La cuestión decisiva es establecer la dimensión adecuada del Estado compatible con la libertad y con su eficacia.

La democracia no basta para resolver los problemas de un pueblo.

La voluntad política sin cauce para ejecutarla hasta su realización concreta, se queda en mera aspiración depositada en las urnas.

El cambio que exigen los países de iberoamérica es en verdad un cambio profundo en la atención a los problemas sociales, un cambio urgente y desesperado, que democráticamente tiene que administrarse con dinamismo a la vez que se encauza el crecimiento económico sostenido.

Los logros alcanzados durante los pasados años por la mayoría de los países iberoamericanos a nivel macroeconómico proveen una excelente plataforma para encauzar las políticas de justicia social que urgentemente se requieren. No se puede lograr esta fase con el modelo burocrático desgastado del pasado. Es necesario: que se incorpore la participación de diversos grupos sociales; que se utilicen sistemas transparentes de información y diálogo para que se establezcan consensos de apoyo a la gestión.

Ahora es el momento para dinamizar esos gobiernos reconociendo que el mercado por si solo no resuelve la pobreza, ni el hambre, ni la falta de educación, de techo o de salud.

A la luz de estas consideraciones veámos lo que ha estado ocurriendo en estos últimos años en Venezuela, Méjico y Chile.

Venezuela, Un Nuevo y Difícil Comienzo

El 1ro. de febrero de 1992, el Presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez habló ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esa noche tuve la oportunidad de compartir con él en una cena que en su honor organizó la misión de Venezuela a Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Pérez lucía eufórico con los resultados de su política económica en Venezuela. Con un crecimiento del 9 por 100, se sentía confiado que podría enfrentar los

problemas sociales que planteaban los cambios estructurales a la economía. La estabilidad de la democracia venezolana se daba por sentada, sin lugar a dudas, aquella noche en Nueva York. Tres días después, por poco terminan las tres décadas de democracia cuando un batallón de paracaidistas dirigido por el Coronel Hugo Chávez Frías sitió el Palacio de Miraflores. Después de una refriega donde murieron 80 personas, la cual obligó a Pérez a escapar para salvar su vida, los insurrectos fueron derrotados. Se pudo reestablecer el orden, pero el régimen democrático quedó tambaleando sobre las cuerdas del cuadrilátero político venezolano. En noviembre se logró contener un segundo golpe militar al precio de la muerte de cientos de civiles y del encarcelamiento de civiles y militares. Durante los primeros meses de 1993, se intensificaron protestas callejeras y amenazas contra el gobierno en distintas partes del país. Finalmente se utilizó un recurso previsto por la Constitución venezolana para cesar al presidente en su cargo, e instaurar un presidente provisional.

Por primera vez desde que Rómulo Betancourt inició la alternancia democrática en la presidencia de Venezuela, un presidente electo por el pueblo no llegaba al fin de su mandato. Se había agotado la tolerancia política del país engendrada por la riqueza petrolera que había financiado un estado hipertrofiado, ineficiente y altamente permeable a la corrupción.

Cuando el liderazgo venezolano vino a reconocer la necesidad de efectuar ajustes estructurales en la economía, carecía de autoridad moral para exigir sacrificios de la población. De ahí los motines callejeros que se producen a dos semanas de la toma de

posesión de Pérez con motivo de las primeras medidas de austeridad. Reacción que va incrementando a lo largo de su término y de la implantación de nuevas medidas de austeridad que motivan tal desasosiego social que convierte a unos sectores de las fuerzas armadas en autoproclamados defensores de la moral pública, el progreso y la calidad de vida en Venezuela.

El pasado 5 de diciembre, este desasosiego se volcó en las urnas electorales. Con un 30 por 100 de los votos triunfó el ex Presidente Rafael Caldera frente a una abigarrada amalgama de minipartidos denominada el Movimiento de Convergencia. Entre Caldera y el candidato de la Causa R, un nuevo partido que adquiere carácter nacional poco antes de las elecciones, sacan el 51 por 100 de los votos para la presidencia. Sin embargo, en el Congreso, Acción Democrática y Copei, los grandes partidos de Venezuela, a la vez grandes perdedores para la presidencia, logran entre ambos una mayoría, con los diputados de la Causa R siguiendo de cerca a Copei y luego los del Movimiento de Convergencia.

El sistema de dos partidos fuertes, que se alternaban en el poder y lo concertaban ante las amenazas al orden democrático, llegó a su fin. Este sistema, que le sirvió bien a una Venezuela más pobre, eminentemente rural, menos alfabetizada que hoy ya no satisface al país. Los electores venezolanos han exigido que la "perestroika" en lo económico se acompañe por la "glasnost" en lo político.

Esta constelación de fuerzas políticas augura enormes dificultades de gobernabilidad para Venezuela. La democracia es amenazada por el inadecuado funcionamiento de las instituciones y

procesos de la propia democracia. Al sistema presidencialista con su separación de poderes se le hace difícil producir los consensos necesarios para enfrentar la crisis. El problema que tiene Venezuela es que el sistema no conjuga las mayorías necesarias para gobernar y tiende hacia la polarización. En momentos de crisis el sistema presidencial se presenta inflexible sin permitir cambios hasta vencido el término por el cual fue elegido el gobierno.

No tiene mucho espacio el doctor Caldera para maniobrar la economía venezolana, ni tampoco mucho tiempo, debido a la creciente pobreza que padece el país, la cual se hace más dolorosa con el aumento de la inflación.

Frente a la posibilidad de un tranque con el Congreso, se ha planteado en Venezuela una reforma constitucional que Caldera considera prioritaria. Se trata de introducir un elemento de parlamentarismo dentro del sistema presidencial. Mediante esta reforma, el Ejecutivo sería autorizado a plantear una consulta popular sobre la revocatoria del mandato de los miembros del Congreso y de recibir el apoyo, se convocaría a nuevas elecciones parlamentarias. Esta enmienda constitucional sería la alternativa que tendría Caldera de fracasar su diálogo con las otras fuerzas políticas para lograr el apoyo del parlamento a sus medidas.

La "cogollocracia", que es el nombre peyorativo que los venezolanos daban a su sistema de democracia, fue sometida al proceso depurador de las urnas en las pasadas elecciones. Ha surgido un nuevo alineamiento de las fuerzas políticas dentro de Venezuela que, en efecto, exige un nuevo estilo de gobierno democrático. El sistema gubernamental de Venezuela se encuentra

dentro de un proceso evolutivo y ante retos que tendrán que superarse o mediante la habilidad de conducción política de Caldera o con medidas de carácter institucional.

Méjico, en la Encrucijada

El levantamiento indígena de Chiapas agrega un factor importante a varios otros que sitúan a Méjico, en este año de 1994, ante la difícil encrucijada de continuar su ruta ascendente hacia la modernidad o deslizarse por los caminos que señalan los paradigmas del pasado.

Una vez más se hace patente la enorme complejidad de gobernar dentro del fluido orden mundial de fin de siglo, donde vamos avanzando hacia una mayor integración global y regional de mercados altamente competitivos, donde adelanta la instauración de la democracia pero no siempre de la libertad, donde las etnias que han estado bajo dominaciones políticas correspondientes al antiguo orden buscan su propio espacio vital.

A México le sucede lo que a tantos otros países en este fin de siglo: un desafío le sigue a otro sin dar tregua ni reposo, sin permitir la estabilidad de un progreso consolidado. México tiene que continuar avanzando para no retroceder. Sus avances modernizantes bajo la presidencia de Salinas son impresionantes, aunque desiguales.

Se ha abierto un proceso que requiere continuidad y profundidad. La respuesta a los sucesos de Chiapas exige una honda sensibilidad a la problemática social y cultural, aparte de lo obvio en lo económico y político y tiene que producirse a la vez que el país

encara otros retos, que pueden desacelerar el importante progreso logrado.

Salinas ha efectuado cambios macroeconómicos de enorme importancia. Ha equilibrado los presupuestos, ha abierto la economía hacia los mercados exteriores, ha suscrito el país al GATT, ha reducido la inflación y el peso de la deuda externa, ha privatizado extensamente las empresas estatales, ha autorizado la inversión extranjera con carácter mayoritario en empresas mexicanas y ha logrado atraer inversiones significativas de capital extranjero.

Su logro más importante en lo económico es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá: el primer Tratado de su naturaleza entre dos países altamente industrializados y un país en vías de desarrollo. Bajo el TLC, el capital, la tecnología, la red distributiva y la experiencia de Estados Unidos y Canadá se combinan con el trabajo barato y los recursos mexicanos para servir al mercado con mayor población en el mundo.

En lo social, el logro principal se ha alcanzado a través del programa de solidaridad. La distribución social de los ingresos nacionales procedentes de las privatizaciones se ha efectuado mediante el mencionado programa montado a un ritmo de presupuestos del orden de dos mil millones de dólares al año. Bajo el programa se incorpora la participación organizada de la ciudadanía en el desarrollo de obras públicas sencillas y se fomenta el establecimiento de pequeños negocios. De 1988 a hoy han surgido unos ciento cincuenta mil comités de ciudadanos en el territorio nacional; trece millones y medio de mexicanos han logrado proveerse de agua potable de esta manera; dieciséis millones han

logrado los correspondientes tendidos de energía eléctrica; y once millones y medio, instalaciones de alcantarillado sanitario.

No hay duda de que bajo el gobierno de Salinas han ocurrido cambios fundamentales en México. Los patronos han sido gravados con un 2 por 100 de los salarios para fondos de pensiones administrados por la Banca comercial y un 5 por 100 para un fondo de viviendas. También se ha dispuesto un aumento de un 7 por 100 de los salarios mínimos. Sin embargo, no está claro si a pesar de todos los esfuerzos la proporción de gentes viviendo en pobreza ha disminuido. Ante la precaria situación, no es sorprendente que la desesperación del sector indígena haya hecho crisis con un brote de violencia coincidente con el mismo día en que los primeros camiones cruzaban la frontera con los Estados Unidos para inaugurar la vigencia del TLC.

Sea cual sea la autoría intelectual de esta insurrección y la fuente de sus apoyos materiales y humanos, la realidad innegable es la miseria y la marginación en que vive el 30 por 100 de la población mexicana de carácter indígena, condición paupérrima que también comparten millones de mestizos. Igualmente innegable es la brutalidad represiva que ha caracterizado el comportamiento del Ejército mexicano hacia este sector de la población, el cual ha sido objeto de denuncias por organizaciones externas desde hace años.

La angustiada marginación indígena, como sabemos, no es sólo de México. En Guatemala, Ecuador, Bolivia, Perú y otros países de Hispanoamérica, las comunidades indígenas sufren una penosa condición. La raíz del problema es cultural y política.

La insurrección de Chiapas plantea a México una delicada situación para poder enfrentar otro de los grandes retos que tiene que superar en su camino hacia la modernidad: el adecuado funcionamiento de sus procesos democráticos para que su gobierno refleje una auténtica voluntad popular que encarna las reivindicaciones y aspiraciones de las grandes mayorías mexicanas.

Si en verdad se celebran elecciones libres y limpias, el triunfo del PRI no puede darse por descontado. La rebelión indigenista de Chiapas hace patente la existencia de una inconformidad profunda en la sociedad mexicana que busca expresión política. Es precisamente la obra de Salinas la que sienta las bases para que los sectores menos favorecidos se lancen a la lucha política para alcanzar reivindicaciones que anteriormente parecían imposibles. De ahí que la vocación democrática del liderazgo político gubernamental mexicano sea fundamental en esa encrucijada de su historia. Avanzar para México quiere decir que el PRI está dispuesto a perder, aunque haga todo lo legítimamente indecible por ganar. De la legitimidad democrática del próximo gobierno depende que pueda enfrentar sus retos en lo económico, asumir las tareas de hacer la justicia social que reclaman las mayorías mexicanas, atender en profundidad la cuestión indígena y mantener la confianza de la comunidad internacional y de sus socios del Norte para recuperar el crecimiento económico que facilite la solución a sus otros problemas.

En agosto de 1994, al dirigirse a las urnas, los mexicanos tienen una cita con la historia.

Chile, Nuevos Horizontes

Eduardo Frei recibió de manos de Patricio Aylwin el gobierno de Chile, país que ocupa la vanguardia en crecimiento económico con equidad social en Iberoamérica. Llega al poder Aylwin tras la contundente victoria de la democracia cristiana del pasado 11 de diciembre. Su elección, siguiendo la de Aylwin, se considera el paso más convincente que Chile ha dado para dejar atrás los días de gobiernos militares y políticas de extrema derecha.

La elección fue un voto para continuar las políticas sociales y económicas de la concertación de fuerzas de izquierda lideradas desde el centro por la democracia cristiana. Los cuatro millones de chilenos que todavía viven en la pobreza sostienen una viva esperanza de que el crecimiento económico impulsado por la democracia cristiana les hará justicia. La inmensa mayoría de los chilenos, incluyendo aquellos que dan crédito a Pinochet por haber saneado la economía y haber reducido el Estado, se sienten aliviados porque, luego de adoptarse la Constitución, el fantasma de los golpes militares, asesinatos y desapariciones, palidece con cada elección.

A Patricio Aylwin le correspondió reconstruir la unidad nacional y reconciliar los enemigos que habían polarizado el país durante el régimen de Pinochet. Esto requería una búsqueda de consenso en pro de una equidad social que beneficiara a todos los chilenos. Este nuevo consenso exigía un pacto entre trabajadores y patronos, un plan salarial más justo pero realista. El salario mínimo se aumentó en un 30 por 100 y los trabajadores acordaron que sus

aumentos salariales se vincularan a incrementos en la productividad.

Simultáneamente se incrementaron los impuestos. El impuesto sobre ganancias en negocios aumentó de un 10 por 100 a un 15 por 100 y el IVA se elevó a un 18 por 100. Los recursos que generó este aumento se dirigieron a reducir la pobreza, invirtiendo en las necesidades de la gente, vivienda, sanidad, educación y formación profesional.

La estrategia funcionó. Al final del quinquenio, un millón de chilenos había sido rescatado de la pobreza. El crecimiento económico se mantuvo alto mediante una exportación diversificada en cuanto a productos y en cuanto a los mercados hacia los cuales iban dirigidos.

Hoy por hoy, la economía chilena se considera como la mejor administrada de toda Iberoamérica y como una de las mejores administradas del mundo. El crecimiento económico se ha mantenido por varios años a niveles superiores al 6 por 100, el Estado tiene un superávit presupuestario, la inflación se ha estabilizado, la inversión doméstica y extranjera es de un 27 por 100 del Producto Interno Bruto, más allá que en Hong Kong o en Taiwan, y el desempleo es sólo de un 4.5 por 100.

Sin embargo, la democracia chilena continúa a la sombra de Pinochet, quien a sus setenta y ocho años, permanecerá como comandante en jefe del Ejército hasta 1998 bajo las disposiciones de la Constitución. La relación con Pinochet y con los altos mandos militares a quienes no puede remover de su puesto será uno de los principales retos de la presidencia de Frei. El reclamo de los deudos

de los asesinados o desaparecidos para que se terminen los procesos investigativos crea una tensión constante entre el Ejército y el gobierno civil.

En el frente económico, Frei, al ser electo, anunció su decisión de gestionar la incorporación de Chile al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Chile tiene ya un tratado bilateral de libre comercio con México. También ha establecido acuerdos comerciales con Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela y está próximo a concluir otro con Ecuador.

El Gobierno de Clinton ha señalado que el próximo país con el cual Estados Unidos negociará la incorporación al TLC es con Chile. Si Chile se incorpora al TLC, las políticas de liberalización de mercado que se han establecido en el país quedarían fuertemente afianzadas. Tanto el Estado como el sector privado chileno tendrán que ser gestionados a altos niveles de productividad. El sector manufacturero de exportación será el sector a desarrollar con inversiones extranjeras, dados los costos más bajos de producción en Chile. De lo contrario, el efecto del TLC sería generar una fuerte corriente de importaciones de los Estados Unidos. Esto exigirá un alto grado de disciplina del sector político y de la fuerza trabajadora, al igual que de la comunidad empresarial.

Se juega mucho en todo esto. Si Chile se incorpora a TLC acelerará un movimiento en la misma dirección de numerosos países de Iberoamérica. Ya Menem anunció en Madrid en su visita de la semana pasada que se propone gestionar la incorporación de Argentina. Ya existen quince acuerdos de bases --framework agreements-- para negociar acuerdos de libre comercio en Estados

Unidos y treinta países iberoamericanos o caribeños. Todos son bilaterales, con excepción de dos: el negociado por Mercosur -- Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay-- y el de los trece países caribeños agrupados bajo Caricom.

Ni Iberoamérica ni los países caribeños tienen estrategias claramente definidas con el necesario entendimiento y apoyo popular para entrar en negociaciones de esta naturaleza. Se suscitan importantes cuestiones hasta ahora no debidamente ponderadas por los países que pretenden entrar en el TLC, a saber: renunciar a determinar independientemente su política macroeconómica en lo comercial y lo monetario, la determinación de sus posibilidades de atraer inversión externa frente a sus competidores iberoamericanos o caribeños que accedan al TLC, de lo cual depende el balance positivo para el país al ingresar en la asociación, y si sus economías pueden bajar sus tarifas a los niveles de Estados Unidos y mantenerse a flote.

Que Chile es el país que más ha avanzado en la dirección de una estabilidad democrática y política con crecimiento económico y justicia social. México le anda detrás pero a bastante distancia. Argentina hace un tercero con bastantes dificultades para consolidar sus avances económicos dada la fragilidad que plantea la insistencia en la reelección de Menem. Países como Uruguay, Bolivia y los Centroamericanos con la excepción de Costa Rica, dependen grandemente del crecimiento económico que puedan lograr para afianzar sus democracias y comenzar a enfocar sobre la gestión moderna de sus gobiernos. En cuanto al Brazil hay una gran

interrogante sobre si su clase política puede estar a la altura de las complejidades que atenazan a este gigante.

En el Caribe, Cuba y Haití, plantean los más serios problemas de miseria y autoritarismo. La solución a la democratización de Haití con el retorno de Aristide pasa por la formación de la voluntad política de la OEA, léase Washington, para hacerle frente a la ganga de bandoleros, léase el General Cedrás, con la cual se echaron fuera las unidades militares que se había acordado que entrenarían la nueva policía del régimen democrático.

Cuba, sin embargo, sigue teniendo el poderío militar suficiente para hacer cualquier intervención militar, una operación costosa. El embargo económico que le mantiene los Estados Unidos, permite a Castro la excusa para justificar la miseria que atraviesa el pueblo cubano e impartirle voluntad de lucha ante la adversidad. La apertura que se está dando en lo económico para atraer inversión extranjera y aumentar la productividad es una vía sin retorno para el régimen castrista. La pregunta que nadie sabe contestar, sin embargo, es si se intenta desarrollar un modelo de socialismo pluralista, con planificación económica e inversión extranjera en función de los intereses nacionales, la iniciativa privada y los amortiguadores sociales, producto de la Revolución o si ensaya una versión tropical de las políticas de Deng Xiaoping.
